**COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
SOBRE LAS DENUNCIAS DE UN EVENTUAL FRAUDE Y OTRAS
IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO**

**Sesión 14ª Especial, celebrada el día jueves 16 de octubre de 2014,
de 10:00 a 12:00 horas**

SUMARIO: Se procedió a la votación de las proposiciones y conclusiones de la Comisión.

Se eligió como Diputado informante a don Marcelo Schilling.

I.- PRESIDENCIA

Presidió la sesión el diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez.

Actuó como Abogado Secretario de la Comisión el señor Álvaro Halabí Diuana; como Abogado Ayudante la señorita Sylvia Iglesias Campos y como secretaria administrativa la señora Mariel Camprubi Labra.

II.- ASISTENCIA

Asisten los diputados integrantes de la Comisión señora Marcela Hernando, Andrea Molina, Raúl Saldívar, Marcelo Schilling, Arturo Squella y Osvaldo Urrutia,

III.- CUENTA

Oficio del Intendente de la Región de Valparaíso, N° 3161, de fecha 10 de Octubre de 2014, que da respuesta a oficio N° 21 de la Comisión, informando respecto de los proyectos “Mejoramiento iluminación plaza de Catapilco, Zapallar” e “Instalación Iluminación Ornamental Alejandro Fierro ex borde costero, Zapallar”

IV.- VOTACIÓN DE PROPOSICIONES Y CONCLUSIONES

CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Es preciso consignar que en la última sesión celebrada por esta Comisión Especial Investigadora, prorrogada legal y reglamentariamente, se procedió a discutir y votar las conclusiones y proposiciones que derivan del trabajo realizado en cumplimiento de su mandato.

En primer lugar, corresponde reglamentariamente referirse a las **conclusiones y proposiciones** presentadas ante esta Secretaría por el diputado señor **Oswaldo Urrutia** y la diputada señora **Andrea Molina**, que **resultaron rechazadas** por mayoría de votos.

Puestas en votación, a favor lo hicieron los diputados señores **Joaquín Godoy, Arturo Squella y Oswaldo Urrutia y la diputada señora Andrea Molina.**

En contra lo hicieron los diputados señores **Marco Antonio Núñez, Luís Rocafull** (en reemplazo del diputado señor Fidel Espinoza), **Raúl Saldívar, Marcelo Schilling (Presidente), Gabriel Silber y Víctor Torres.**

Se abstuvo el diputado señor **Giorgio Jackson.**

El texto de las **conclusiones y proposiciones rechazadas** por esta Comisión Especial Investigadora es del tenor que sigue:

“En virtud de los antecedentes y los considerandos anteriores, se concluye:

1. Que una vez más, se han producido graves irregularidades dentro del Gobierno Regional de Valparaíso, en cuanto a la utilización de los recursos públicos, en especial los que dicen relación con el FNDR para la ejecución del 6% de iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana.

2. Que las causas por fraudes al interior del Gobierno Regional de Valparaíso se han repetido en el tiempo de manera invariable y con connotación pública en distintas administraciones.

En este sentido, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei fue conocido por todos el caso de malversación de fondos , que tuvo como consecuencia la destitución del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de ese entonces, señor René Lues y la salida del Intendente Hardy Knittel (1994-1997) ; durante el mandato del Presidente Ricardo Lagos con el Intendente Luis Guastavino y el caso de los empleos brujos del PGE, Programas de Generación de Empleo, (2003-2006), con la Presidenta Michelle Bachelet y bajo la administración regional del Intendente Iván de la Maza y los Proyectos Fantasma y sobrepago de proyectos (2008-2009); y finalmente durante el reciente mandato del Presidente Sebastián Piñera con el Intendente Raúl Celis, y el caso de las irregularidades en la asignación del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, correspondientes a Deporte, Cultura y Seguridad Ciudadana (2012), que son materia de la investigación de esta comisión.

3. Que la descripción anterior da cuenta de una organización defectuosa del Gobierno Regional, que ha sido permisible a la comisión de irregularidades por parte de funcionarios y autoridades de distinto nivel dentro de la administración regional.

4. Que en este orden de cosas, ha quedado de manifiesto la existencia de un mecanismo y organización destinada a defraudar dentro del Gobierno Regional, lo que fue establecido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso en su sentencia con fecha 12 de agosto en que se condena a Sergio Núñez, jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, Enrique Kittsteiner y Claudio Uribe, como penalmente responsables de los hechos ocurridos en este último fraude al Gobierno Regional.

5. Que la Constitución Política que hoy nos rige establece como una tarea exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados la de fiscalizar los actos de Gobierno, y una de las formas de fiscalización es la creación de comisiones especiales investigadoras que buscan establecer responsabilidades políticas respecto de quienes se han desempeñado como funcionarios políticos. Por tanto, debemos señalar que la responsabilidad política la entendemos como el deber que tienen los funcionarios políticos que señala la Constitución de ser cuestionados y de explicar ante esta Cámara las acciones u omisiones en que incurran y que dañen el interés público.

6. Que como consecuencia de lo dicho, es necesario y fundamental analizar la conducta y actuaciones del exintendente Raúl Celis, y en este sentido es importante ser categórico que los hechos que constituyen el denominado Fraude en el Gobierno Regional de Valparaíso, que contó con la

participación de miembros del GORE, fueron denunciados personalmente por el ex intendente Raúl Chelis.

7. Es en efecto, una vez finalizadas las instancias administrativas relativas al ejercicio del control jerárquico por parte del Intendente, y al corroborar junto con el Consejo de Defensa del Estado que las irregularidades administrativas que fueron detectadas al interior del servicio podían tener caracteres de delito, es el propio ex intendente el que formula personalmente las denuncias ante el Ministerio Público. Es gracias a estas denuncias que la justicia logró la condena de 3 personas, 2 de ellas con penas efectivas privativas de libertad de 10 y 8 años, las más altas aplicadas hasta ahora por los tribunales de Justicia en causas por defraudaciones al fisco.

En particular, las medidas adoptadas por la autoridad que permitieron que estos casos de corrupción se hicieran públicos y que la justicia pudiera condenar a los responsables son principalmente las siguientes:

a) El ex intendente Celis al tomar conocimiento del caso Quilpué, a propósito de la identificación de cuatro organizaciones con un mismo domicilio, lo cual presumía la ocurrencia de irregularidades administrativas, solicitó ese mismo día un informe al Departamento de Auditoría del Gobierno Regional, indicando que requería que constaran por escrito los hallazgos que se generaran.

b) De acuerdo a la información recibida del Departamento de Auditoría, con la cual se presumía la participación de Sergio Núñez en el caso Quilpué, el exintendente ordenó instruir en forma inmediata sumario administrativo en su contra, procediendo a tomar declaración ese mismo día y siendo suspendido a partir de ese momento de sus funciones.

c) En razón de la situación detectada, y la corrección de los procedimientos ordenados, el exintendente Celis ordenó a los Jefes de División acelerar el proceso de mejora y traspasar los fondos concursables a la División de Análisis y Control de Gestión, como asimismo que fuesen revisados los procedimientos concursales. Como resultado, el 11 de marzo de 2013 el exintendente comunicó, en reunión con todo el personal del Gobierno Regional, del cambio de funciones y responsables de este tipo de proyectos, como también de los avances del plan de mejoras del Gobierno Regional de Valparaíso.

d) Detectadas las diferencias existentes en el procedimiento de rendición de las organizaciones que se adjudicaron proyectos, en un hecho sin precedentes, el exintendente Celis ordenó que se enviaran cartas de cobranza a aquellos beneficiarios de fondos que no hubieren presentado sus rendiciones de cuentas, fijándose plazos para cumplir con esta

obligación e indicando que de no presentar la documentación o si la rendición era insatisfactoria, se remitirían los antecedentes para la cobranza por parte del Consejo de Defensa del Estado. Es importante reiterar que nunca un Intendente Regional de Valparaíso había adoptado medidas tan drásticas al respecto.

e) Con los resultados de los procedimientos administrativos concluidos y la opinión del Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a que los hechos objeto de la investigación administrativa debían ser conocidos por los tribunales de justicia, el exintendente decide formular las respectivas denuncias ante la justicia ordinaria.

f) Es así como el 22 de Julio de 2013 el exintendente presentó ante el Ministerio Público una denuncia, entregando todos los antecedentes que daban cuenta que el señor Sergio Núñez, entre otros aspectos, podría haber obtenido beneficios económicos personales al favorecer con su intervención transferencias desmesuradas de recursos de la glosa de Cultura y Deporte al Club Deportivo Los Leones y entidades relacionadas, en las cuales, como se indicó, participarían ex empleadores del señor Núñez.

g) En relación a lo anterior, el día 26 de agosto de 2013, el exintendente presentó una nueva denuncia al Ministerio Público, que complementó la denuncia anterior y planteó específicamente el caso de la organización Valparaíso Joven y el Club Deportivo Nueva Era, que en conjunto se habían adjudicado 4 proyectos del Fondo de Seguridad Ciudadana y uno del Fondo de Deportes, totalizado un cifra \$174.600.000, agregándose que los proyectos asignados a Valparaíso Joven, que totalizaban \$134.700.000, a esa fecha no habían sido rendidos.

h) Con los antecedentes referidos precedentemente, el Consejo de Defensa del Estado interpuso querrela en contra de Sergio Núñez, Enrique Kittsteiner, Claudio Uribe y otros involucrados en el caso de los fondos recibidos por la organización Valparaíso Joven, obteniendo sentencia condenatoria para los 3 ex funcionarios antes citados.

8. Que a lo anterior se suma que la máxima autoridad regional dispuso una serie de medidas administrativas destinadas a mejorar el sistema y evitar que se produjeran fraudes como los ocurridos en el pasado. En este sentido se implementó un plan de mejoras, a objeto de instaurar medidas de control para resguardar el correcto uso de los recursos públicos, estableciéndose distintos procedimientos, instrucciones y circulares para el personal del Gobierno Regional. Asimismo, contó con un número importante de manuales de procedimiento que regulan el actuar, definen responsabilidades y contienen medidas de control interno con el propósito de minimizar los riesgos inherentes al manejo de altos fondos. Esto en virtud de las recomendaciones

que se hicieron a raíz de la investigación en el primer fraude a la intendencia. (Ver anexo).

9. Que lo señalado en los puntos 6, 7 y 8 da cuenta de que el exintendente Celis adoptó medidas necesarias y recomendadas para evitar situaciones como las descritas, sin embargo, la maquinación del fraude fue elaborada de forma tal, que los involucrados lograron burlar las medidas de control que habían sido establecidas por la autoridad, (aunque después los propios controles internos lograron identificarlos), ya que en su comisión no sólo participaron los funcionarios públicos del Gobierno Regional que fueron condenados y otros que están siendo investigados, sino que para que operara, necesariamente, debía contar con el beneplácito de algunos integrantes del Consejo Regional.

10. Que todo lo expresado en los considerandos 6, 7 y 8, da cuenta de una situación muy diferente a la ocurrida en el primer fraude a la Intendencia de Valparaíso que fue investigado por esta Cámara de Diputados. Así lo señala el informe final de dicha comisión: “Aun cuando las auditorías internas y externas, arrojaron un cúmulo de observaciones, las autoridades y jefaturas no tomaron las providencias necesarias para salvarlas y perseguir las responsabilidades”. La actitud antes descrita es diametralmente opuesta a la que tuvo el exintendente Raúl Celis en relación a su antecesor y que ya fue descrita en los considerandos anteriores.

11. Que las irregularidades investigadas en esta Comisión es posible sistematizarlas de acuerdo a las comunas en las que se ejecutaron los proyectos adjudicados. Así entonces, con el objeto de ser más gráfico en la atribución de responsabilidades políticas en cada arista de la investigación, se analizan a continuación los casos de irregularidades conocidos por la comisión:

a) CASOS IRREGULARES DE QUILPUÉ.

En este caso se evidenció que las instituciones Club Deportivo Nueva Era, Club Deportivo Los Pinos, Club Deportivo Sol del Pacífico y Club Deportivo Los Leones figuraban con una misma dirección, Plutón 1863, comuna de Quilpué, que correspondía a la dirección del Colegio Los Leones.

Según establece el informe de Contraloría y el auditor del Gobierno Regional de Valparaíso señor Maldonado, la estructura de propiedad de este colegio figuraba Carlos Saavedra Lyng, con un 50% de participación dentro de la estructura societaria. A su vez, Saavedra figuraba como socio en el Grupo K, al cual prestó servicios Núñez como gerente de Operaciones, de acuerdo al currículo que este presentó para ingresar al Gobierno Regional.

Las organizaciones vinculadas en el caso global eran el Club Deportivo Colegio Los Leones, Club Deportivo Sol del Pacífico, Club Deportivo Nueva Era y Club Deportivo Los Pinos, los que en total, entre 2010 y 2012, en el marco de esta glosa del 2%, se adjudicaron proyectos por un monto de \$275.220.630. En este mismo sentido, según conoció la comisión, se cuestiona la entrega en comodato de un bus adquirido por la municipalidad, para el uso del Club Deportivo los Leones, según hace referencia el informe de Contraloría.

Una vez finalizada la instancia destinada a atribuir la responsabilidad administrativa y acreditar fehacientemente los hechos, el exintendente presentó ante el Ministerio Público una denuncia, entregando todos los antecedentes que daban cuenta que el señor Sergio Núñez, entre otros aspectos, podría haber obtenido beneficios económicos personales al favorecer con su intervención transferencias desmesuradas de recursos de la glosa de Cultura y Deporte al Colegio Los Leones y entidades relacionadas, en las cuales, como se indicó, participarían ex empleadores del señor Núñez.

Actualmente el señor Núñez se encuentra condenado por la justicia.

Con los antecedentes aportados, la Comisión arriba a la conclusión que la participación del señor Núñez debió contar, al menos, con el conocimiento de Consejeros Regionales que aprobaron los distintos proyectos cuestionados, los cuales serían políticamente responsables de los hechos aquí descritos. Sin embargo, previamente es necesario que la justicia ordinaria se pronuncie respecto de estos casos, que actualmente están siendo investigados.

b) CASO VALPARAÍSO JOVEN.

De la investigación se concluyó que la organización “Valparaíso Joven”, se adjudicó tres proyectos, Seguridad Ciudadana, por la suma de \$94.700.000 de los cuales no se tuvo a la vista las respectivas cotizaciones que sustenten estas sumas.

Se pudo comprobar además que ningún proyecto relacionado con fondos para iniciativas de Seguridad Ciudadana, concurso verano 2013 contó con la evaluación pertinente, ni se logró evidenciar la constitución de las respectivas comisiones de admisibilidad y de evaluación, en función de lo que establecen las respectivas bases y reglamento que regulan el llamado a concursos de estos fondos.

Por este caso, la justicia ordinaria condenó a Enrique Kittsteiner, exjefe de gabinete de la Intendencia, a la pena de cinco años de

presidio menor en su grado máximo como cómplice de malversación de caudales públicos, además de 3 años y un día como autor de fraude al Fisco.

Sin perjuicio de la condena criminal del señor Kittsteiner, esta comisión considera que sus actuaciones fraudulentas debieron ser conocidas, acordadas y aprovechadas por miembros del Consejo Regional, para de esta manera aprobar los proyectos que el señor Kittsteiner sometía a consideración del consejo, a espaldas del exintendente Regional. Sin embargo, antes de establecer la responsabilidad política de aquellos miembros del Consejo que pudieran estar implicados, es necesario que la justicia ordinaria se pronuncie, atendido a que existes investigaciones pendientes.

c) CASO LA CALERA.

Con fecha 30 de abril, mediante Memorándum Reservado 16, se da cuenta al señor intendente eventuales irregularidades proyectos relacionados con las organizaciones: Centro Cultural Rucamanqui, Centro de Madres Nueva Ilusión, Agrupación Cultural, Artística, Recreativa y Ecología Recrearte y Comité Habitacional My Dream House La Calera.

En este caso, según estableció la Contraloría en su investigación estas organizaciones utilizaron el centro de eventos “Doña Anita” para realizar sus actividades, en las cuales participaban candidatos a cargos de elección popular de ese año, entre los cuales se encontraba Christian Urizar, CORE y candidato a diputado por el distrito 10, Héctor Correa, candidato a Alcalde de La Calera, René Lues, Secretario del CORE y candidato a Alcalde de Viña del Mar y Roxana Saavedra, Filomena Navia y Paola Catalán, candidatas a concejales de las comunas de Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, respectivamente.

Respecto a lo anterior, esta Comisión condena la participación de todos los candidatos mencionados, quienes aprovechando la instancia descrita anteriormente, utilizaron los proyectos que se financiaron con recursos fiscales para realizar actividades relacionadas con sus campañas electorales. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que les pueda atribuir, esta Comisión Investigadora concluye que quienes actualmente ejercen cargos públicos son los responsables políticos de las actuaciones descritas.

d) CASO VIÑA DEL MAR.

De los hechos denunciados e investigados por la Contraloría, así como por los antecedentes y declaraciones allegadas a esta

comisión, es posible establecer fehacientemente la responsabilidad del ex Secretario Ejecutivo del Consejo Regional y actual Consejero, señor René Lues, como el principal articulador de un sistema que permitió financiar la campaña de distintos candidatos que se consignan en el informe de Contraloría, como la suya propia. En efecto, dentro de los antecedentes que dispone esta comisión, el informe señala expresamente que 60 personas señalaron haber participado en actividades en el Centro de Eventos Doña Anita, en el cual el señor Lues “les entregó calendarios, afiches relacionados con su candidatura, solicitando su apoyo y voto en las elecciones municipales de ese año”.

Tratándose de los proyectos “Vida y Salud con Alegría, “Mente Sana en Cuerpo Sano” y “Vida Alcanzando Sueños” y “Centro Comunitario del Cerro al Mar”, respectivamente en los cuales se denuncia la participación del citado ex Secretario del CORE, “los dos primeros de ellos fueron ejecutados entre febrero y abril de 2012, fecha en la cual éste ocupaba el referido cargo, actuación que vulneró el principio de probidad administrativa contemplado en el inciso primero del artículo 8 de la Constitución Política de la República, conforme al cual “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio que, además, se encuentra regulado en diversas disposiciones de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente a las contenidas en su Título III y el artículo 19 de la citada ley, que dispone que el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, en tanto que al artículo 27 de la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, ordena que “Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.

Las situaciones antes descritas infringen, además, el numeral 2 del instructivo de procedimiento adicional a las bases de deporte que rigen los concursos de que se trata, aprobados mediante las resoluciones exentas N° 330 y 364, de 2011 y 2012, respectivamente, que señalan que los proyectos durante su periodo de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas y religiosas.

En cuanto al ejercicio de su cargo como Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, el señor Lues no cumplió debidamente su función, ya que en virtud de los antecedentes que obran en esta comisión fue negligente en su deber de custodiar los registros de audio de las sesiones del Consejo. Asimismo, según se pudo comprobar, el señor Lues adulteró las actas

de las sesiones para beneficiar a proyectos determinados, en perjuicio de otros que en la sesión respectiva fueron aprobados, según constaba en los registros de audio que desaparecieron.

De esta manera, se pudo establecer que el señor Lues es parte de la maquinaria creada para aprobar proyectos en beneficio de ciertas personas o instituciones determinadas.

Es más, en su rol de Ministro de Fe del Consejo, él podría haber perfectamente haber puesto en conocimiento de la justicia las situaciones fraudulentas, sin embargo, esto no fue así, por lo cual la justicia deberá determinar si él cometió un delito en ejercicio de su cargo.

Respecto al ejercicio de su función, es necesario recordar que durante el mandato del Presidente Eduardo Frei, el señor Lues ejercía el mismo cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, siendo destituido en el marco de las investigaciones del conocido caso Malversación de Fondos (1997)".

CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN

I.- Propuestas presentadas por la diputada señora Marcela Hernando y por los diputados señores Arturo Squella y Raúl Saldívar.

Fueron aprobadas por unanimidad, con los votos de los diputados señores **Joaquín Godoy, Giorgio Jackson, Marco Antonio Núñez, Luís Rocafull** (en reemplazo del diputado señor Fidel Espinoza), **Raúl Saldívar, Marcelo Schilling** (Presidente), **Gabriel Silber, Arturo Squella, Víctor Torres y Osvaldo Urrutia** y de las diputadas señoras **Marcela Hernando y Andrea Molina**.

El texto de las proposiciones aprobadas por esta Comisión Especial Investigadora, es el siguiente:

“PROPUESTA PARA PREVENIR EL MAL USO DE FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL CUYO DESTINO ES FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA; DEL DEPORTE; SEGURIDAD

CIUDADANA Y SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Con la finalidad de optimizar el proceso de asignación de estos recursos se proponen las siguientes modificaciones a la normativa actual:

1. Respecto del Fondo a distribuir, el CORE (Consejo Regional) deberá dividir este Fondo en dos, definiendo un porcentaje para el concurso de organizaciones Privadas sin Fines de Lucro (FONDO A) y un porcentaje para el concurso de Municipios o Asociaciones de municipios (FONDO B).

1.1. En el caso del 2% susceptible de dedicar a proyectos de seguridad ciudadana, se deberá destinar un mínimo de 70% para organismos públicos. Se podrá postular para la ejecución de planes comunales de seguridad.

1.2. Para el 2% de cultura y el 2% de deporte: ninguno de los porcentajes (privado vs público) deberá exceder del 60% ni ser menos del 40%.

1.3. Hacer un llamado anual a concurso público para la distribución de cada uno de estos fondos que componen el 6%, todo ello de manera diferida y antes de cada 31 de diciembre.

2. FONDO A:

2.1. En los recursos destinados a financiar las iniciativas de Instituciones Privadas sin fines de Lucro, se propone que el Gobierno Regional (entendido como el CORE + Intendente), efectúe una distribución a nivel global para cada municipio, teniendo presente en el proceso de distribución lo señalado en el artículo 19, letra f) de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; las Estrategias Regionales de Desarrollo y las Políticas Regionales relacionadas con estas materias, aprobadas por el Gobierno Regional; y las orientaciones señaladas en la glosa específica contenida en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

2.2. Se sugiere que del fondo para organizaciones privadas, los municipios puedan destinar un porcentaje para proyectos que sólo busquen financiamiento de la operación de estas organizaciones y podrá establecer montos tope para estos efectos.

2.3. Los municipios convocarán a concurso a las Instituciones Privadas sin fines de lucro, utilizando Bases, visadas por los Gobiernos Regionales.

2.4. Las postulaciones de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, se efectuarán a través de la Plataforma Electrónica www.chileindica.cl, administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con postulaciones ciegas e incorporación a través de formato digital de todos los antecedentes del concurso. Esta plataforma digital determinará la admisibilidad respecto de requisitos administrativos. De esta forma se garantiza la transparencia y el control ciudadano de los concursos.

2.5. Efectuado el concurso, el Alcalde presentará al Concejo Municipal, el listado de las iniciativas declaradas admisibles, y una propuesta de priorización para su aprobación. Posteriormente informará al Intendente sobre los resultados del concurso, proponiendo las instituciones e iniciativas aprobadas y priorizadas. Esta etapa es la que define la pertinencia técnica, social y política de los proyectos.

3. FONDO B:

3.1. Los gobiernos regionales (CORE más intendente regional) convocarán a concurso a los municipios y asociaciones de municipalidades, utilizando BASES TIPO elaboradas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

3.2. La evaluación de admisibilidad administrativa la hace la plataforma www.chileindica.cl administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

3.3. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

3.4. La evaluación de admisibilidad respecto de pertinencia técnica la hace el pleno del Consejo Regional (CORE).

3.5. Efectuado el concurso el Intendente regional presentará al Consejo Regional (CORE), el listado priorizado de las iniciativas declaradas admisibles, para su aprobación. Posteriormente informará PÚBLICAMENTE sobre los resultados del concurso.

4. Otras medidas administrativas:

4.1. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo conjuntamente con la Dirección de Presupuestos, anualmente

elaborará un instructivo que enviará a los Gobiernos Regionales, señalando los criterios básicos que deben contener los reglamentos que regulen los concursos y en especial en cuanto a los procedimientos a seguir para hacer operativa la distribución del 6% del FNDR en cada una de sus tres categorías (cultura, deporte y seguridad ciudadana).

4.2. Con la finalidad de regular los recursos destinados a financiar gastos operacionales y administrativos dentro de las iniciativas, se propone establecer restricciones en términos de porcentaje (máximo 20%) al financiamiento de estos gastos.

4.3. Para regular el financiamiento de iniciativas a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que se constituyan sólo para obtener los beneficios de estas iniciativas se propone:

4.3.1. En el caso de organizaciones nuevas (menos de 1 año) se deberá exigir un aporte mínimo del 20% del total del proyecto;

4.3.2. Las organizaciones con trayectoria acreditada mayor a 1 año no requerirán dicho aporte.

4.4. Aumentar los controles y fiscalización en términos del cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley N° 19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

5. Fortalecimiento legal y administrativo de la unidad de control interna de los gobiernos regionales, en especial respecto de sus competencias y capacidades funcionarias.

6. Creación de un organismo de carácter autónomo, que se ocupe exclusivamente de atender y fiscalizar asuntos de probidad en el gobierno regional, integrado por funcionarios designados por el sistema de Alta Dirección Pública.

7. Se efectúe una auditoría externa al Gobierno Regional, a lo menos dos veces en cada período del mismo, a petición del Intendente Regional o del Consejo Regional.

8. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República considere y materialice estas propuestas y recomendaciones en un proyecto de ley y en medidas administrativas concretas”.

II.- Conclusiones y proposiciones presentadas por el diputado señor Marcelo Schilling.

Fueron **aprobadas** por mayoría de votos.

A favor lo hicieron los diputados señores **Giorgio Jackson, Marco Antonio Nuñez, Luis Rocafull** (en reemplazo del diputado señor Fidel Espinoza), **Raúl Saldívar, Marcelo Schilling** (Presidente), **Gabriel Silber y Víctor Torres** y la diputada señora **Marcela Hernando**.

En contra lo hicieron los diputados señores **Joaquín Godoy, Arturo Squella y Osvaldo Urrutia** y la diputada señora **Andrea Molina**.

El texto de las conclusiones aprobadas por esta Comisión Especial Investigadora, es el siguiente:

“CONCLUSIONES

Al tenor de los hechos que han sido recabados por la comisión consistente en las declaraciones del exintendente CELIS, KITTSTEINER, LUES, RODRÍGUEZ, ARQUEROS, MALDONADO, CONTADOR, URIZAR, etc.

Los documentos recabados durante el funcionamiento de la comisión investigadora.

La sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral RIT 185 – 2014, actualmente firme y ejecutoriada.

El hecho reiterado de graves denuncias y hechos investigados relacionados a malversación de fondos en la Intendencia y el Gobierno Regional de Valparaíso.

1. LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL COMO CASO PARADIGMÁTICO DE UNA ORGANIZACIÓN DEFECTUOSA.

Una organización defectuosa es aquella que carece de un adecuado modelo organizativo o mecanismo de prevención, en otras palabras, es aquella que ha facilitado o no ha impedido que sus funcionarios hayan realizado un hecho delictivo singular; será ese defecto de organización concreto lo que constituya el hecho delictivo propio del organismo. Esta cultura institucional defectuosa fomenta la realización de hechos irregulares.

Lo anterior se manifiesta en la denuncia de irregularidades en el Gobierno Regional en el proceso de asignación de fondos concursables, que se expresan en los casos correspondientes a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, La Calera, en que se persigue determinar las actuaciones del Intendente Regional, el jefe de Gabinete del Gobierno Regional, y el secretario ejecutivo.

La comisión investigadora ha recibido indicios que permiten efectuar una inferencia sobre los graves problemas que afectan al gobierno regional: en los siguientes aspectos:

a) Asignación de fondos concursables en materia de cultura, deportes y seguridad ciudadana:

Existen diversos testimonios, como el del auditor OSVALDO MALDONADO, quien manifestó lo siguiente:

“Primero los hechos demostraban que don Sergio era responsable de seguridad ciudadana, los convenios tenían su mosca y trataron de visualizar los actores del proceso y en la fase investigativa hubo un correo electrónico que proporcionó Patricia Freire y mostraba que Sergio instruía al concurso T” de segundo semestre del año 2012 de seguridad ciudadana, cultura y deportes estaba bajo dirección de planificación. Al ver los proyectos solo vieron eso, las carpetas no estaban con actas de comisiones de admisibilidad ni evaluación. Analizadas las bases eran condición necesaria y suficiente para que se asignaran esos proyectos”.

Las irregularidades en los procesos de concursos se acreditan según lo que expresa la testigo MARIA TERESA BLANCO:

En el primer concurso trabajaron ambas divisiones, con Sergio. El concurso 1 se llevó a cabo en mayo de 2012 si mal no recuerda. Finalizó en mayo, comenzó en marzo o abril de 2012. El Fiscal exhibe

documentos (41) es el acta de comisión de admisibilidad de 16 de mayo de 2012. Esa acta la hizo ella, postularon 83 proyectos, del sector público quedaron 12 y del sector privado quedaron 4. O sea quedaron 16 de un total de 83. Página 6) ese es el checklist que se hacía, se trata de documentación, es para el sector privado. Página 12) en la primera columna sale el total de proyectos recibidos dentro de plazo 83, el 64% corresponde a privados y el 35% a sector público, hay un proyecto sin monto. En la segunda línea el número de proyectos que cumplió con la admisibilidad o sea el checklist, 12 para el público y 4 para el privado. Después venía la comisión de evaluación, estaba integrada por los tres jefes de división y esa no alcanzó a constituirse. Cuando salió el resultado de esta comisión, presentaron estos resultados en la comisión de educación y cultura del CORE, ella no se vinculaba con esa comisión.

En la comisión deberían estar solamente los participantes, pero asistían todos los consejeros que querían informarse y estaban casi todos, cuando ella presentó los resultados, no tenía gran vínculo y generalmente discutían, ha sido una de las cosas que quiere borrar en su vida profesional, los consejeros la trataron muy mal en esa ocasión, antes decían que ella era solo técnica y no política y lo menos que le dijeron es que demostrara que los dos magíster que tenía no se los había ganado en un sorteo.

Puede apreciarse, además, como práctica habitual por parte de las organizaciones que postulaban a estos fondos de solicitar entrevistas con el exintendente, tal como se desprende del testimonio judicial del representante de la organización Arte y Música Reñaca, exalmirante JUAN CARLOS TOLEDO:

“La primera reunión la tuvieron con el intendente con la intención de salvar el colegio alemán, **esto fue con el intendente Celis y les señaló que veía con agrado que entraran a estos fondos y que de ahí en adelante podían hablar con Enrique Kittsteiner su jefe de gabinete.** Hablaron con él desde hace unos 3 a 4 años, antes hablaron con el señor anterior, no recuerda el nombre, era el antiguo jefe de gabinete. El intendente les señaló que debían entenderse en adelante con Kittsteiner, al término de la reunión le indicaron que iban a postular al fondo del 2%, esto partió el año 2010. **En algunas oportunidades hablaron con Celis de los proyectos en su oficina.** Sus relaciones con Kittsteiner eran muy cordiales, difícil de conversar con él era difícil porque estaba muy ocupado, le fueron a preguntar cuándo iban a ser los concursos, cuando se iba a realizar la tercera temporada en octubre, ellos en septiembre pidieron asignación pero no quedaron en ese concurso y preocupados por esta situación le preguntaron a Kittsteiner que había pasado y dijo - no quedaron - y le dijo a su hijo, no a él pero vamos a ver modo de entregarles fondos de seguridad ciudadana, esto fue el año 2012”.

En cuanto a las modalidades de pago de los recursos resulta importante señalar lo afirmado por la Jefa de Finanzas, ELIZABETH MONTENEGRO, a propósito de los pagos efectuados el año 2012 en materia de seguridad ciudadana:

“Se le instruyó que proyectos debía pagar primero, el 8 de octubre se le indica que debe crearle a cuatro proyectos asignación presupuestaria, **dos de la fundación Jaime Fillol cada uno por 34 millones y dos para Valparaíso Joven** uno por 30 y otro por 40 millones de pesos. Esto lo pidió Núñez por mail. (43) es una nómina del Banco Estado se hizo transferencia a través de pagos masivos, sale SIFTE y se carga en el banco y se indica la cuenta corriente y monto, lleva un número que le da el sistema y se dice de donde es la nómina, es del FNDR de seguridad ciudadana. Abajo va el nombre de la institución, fue subida el 18 del 10 de 2012 a las 14:43 horas”

b) “Cuoteo” o equidad territorial. Incompatibilidad de este criterio, conforme al principio de probidad:

Al respecto se puede mencionar el testimonio del imputado del señor SERGIO NUÑEZ en la sentencia RIT 185 – 2014.

“...Hay 3, administración y finanzas, planificación y desarrollo y análisis de control y gestión, las tres personas son de confianza exclusiva del Intendente Regional. En cada una de las 3 divisiones había un jefe. A planificación y desarrollo estaba adscrita la unidad de cultura y deportes, ellos llamaban a esos concursos. El habló de un cuoteo político en su declaración, al no ser concurso público jugaba con las personas y que muchas personas quedaba fuera de participar, esto era un cuoteo político, el 2% del gobierno regional destinado a cultura cerca de 1.000 millones de pesos fue cuoteado políticamente y otros 1.000 millones de pesos para deportes. Hasta que él está en prisión preventiva esto nadie lo conocía e incluso fue negado. En su declaración lo señala al señor fiscal, no sabe qué ha pasado con esto. Como se repartía el cuoteo. El 30% para el intendente y el 70% restante se dividían en 28 cuotas iguales para cada consejero regional. Cada uno de los dueños de su cuota podían elegir libremente que proyecto le interesaba dentro del concurso y se iba cargando a su cuota, el manejo del control de esas cuotas lo manejó el jefe de la división de planificación y desarrollo señor Luis Alberto Rodríguez, luego un secretario técnico de la comisión de cultura y deporte, olvidó su nombre y de noviembre de 2010 en adelante recae en su persona. Él era ejecutivo de la cuenta desde noviembre de 2010 en adelante para que cada uno no se sobrepasara en su cuota que se habían asignado porque los gobiernos

regionales y las partidas presupuestarias se gastan hasta el 100%, no se puede exceder.

Por otro lado, hay que tener presente lo que afirma el EXINTENDENTE RAÚL CELIS en este mismo tema:

El detalle exacto de las cuotas él no lo manejaba, el jefe de gabinete sabía lo de las cuentas. Mejor derecho en un 30% al intendente y mejor derecho del 70% de los consejeros. En ese reglamento se habla de esta distribución territorial, lo ignora si se dice allí. El consejo debe adoptar medidas para que hubiera distribución territorial, se suprimieron los marcos territoriales y se aplicó equidad de 30% para el intendente y el 70% restante para los consejeros, eso guardaba armonía con el sistema antiguo de los marcos provinciales. No se señala este criterio de distribución, debía adoptarse medidas para que el principio de equidad territorial se vea en la práctica. Esa norma de repartición del 30% y 70% no está escrita.

2. LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL COMO CONTEXTO DE IMPUTACION.

Efectuada la constatación de graves problemas de organización, resulta acreditado el hecho público y notorio vinculado a las graves irregularidades detectadas durante los últimos siete años en la Intendencia de Valparaíso, que han significado investigaciones y juicios por los delitos de malversación y fraude de los recursos públicos destinados a FNDR.

En este sentido, y sobre la base de la investigación desarrollada resulta necesario explicar el origen de la materialización -en un período corto de tiempo-, de sendos escándalos de corrupción en el Gobierno Regional.

En términos fenomenológicos, se trata de aprehender estos hechos a objeto de precisar el estatus en que pueden encasillar estas conductas, es decir, por una parte si tales conductas se incardinan en un SISTEMA DE INJUSTO SIMPLE, es decir, "relaciones entre individuos organizadas hacia fines injustos", como podría ser el acuerdo de dos o más funcionarios para incurrir en conductas antijurídicas. En este sentido un sistema de injusto será simple en la medida en que el sistema se halle organizado "hacia un fin común a través de la voluntad de los individuos", en otras palabras se trata de un grupo de sujetos que se proponen la realización de un delito conjuntamente al margen de factores institucionales.

Otra posibilidad, es entender los hechos objetos de esta investigación, son expresivos de un SISTEMA DE INJUSTO CONSTITUIDO, que a diferencia del caso anterior, se explica **en tanto su organización adquiere una “configuración institucional duradera mediante una constitución** o unos estatutos”. EN ESTE PUNTO, cuando se señala a LA ORGANIZACIÓN COMO CONTEXTO, a nivel de la estructura de imputación es relevante frente a la pregunta de la configuración y distribución de la responsabilidad. Para el injusto constituido de una institución (o empresa con tendencia criminal), por su parte, los factores determinantes serían los siguientes: el peligro potencial de la organización, mecánica o lógicamente dispuesta para la respectiva prestación; **el déficit de la respectiva estructura organizacional**; una filosofía institucional criminógena (aprobar proyectos fuera de las base, no realizar comisiones evaluadoras, modificar puntajes asignados, cuotear los recursos disponibles, establecer mecanismos de discrecionalidad para priorizar proyectos, etc.); y una erosión de la noción de responsabilidad por la acción individual.

En este sentido es posible afirmar las nefastas CONSECUENCIAS DE UN DEFECTO ORGANIZACIONAL, que se traduce en una doble función de garantía de ilicitudes que desempeña la organización: por una parte, la garantía de la pervivencia del riesgo creado por cada miembro, así como la garantía de la conexión de dicho riesgo con aquel generado por los intervinientes en un determinado hecho delictivo particular. En otras palabras, la situación del Gobierno regional en cuanto organismo encargado de la asignación de recursos, es demostrativo de los altos riesgos institucionales en los procesos de asignación de recursos en todos los niveles del proceso administrativo, siendo los propios funcionarios los que asimilan estos defectos contribuyendo a su pervivencia en el tiempo.

El significado preciso de la variable organizacional en este ámbito es demostrativo que se trataría, de “un sistema de acumulación institucionalizada de aportaciones individuales favorecedoras de la ejecución de los delitos-fin en el seno de la organización que es el Gobierno Regional.

Las declaraciones de Sergio Nuñez dan cuenta de este defecto, como se citó en el punto anterior, “Yo hablé de un cuoteo político, esto en vez de ser concursado, fue cuoteado políticamente (al menos 2 mil millones), 30% el señor intendente y el saldo restante para los consejeros regionales; cada uno elegía que materia interesaba”; la declaración del AUDITOR OSVALDO MALDONADO, por su parte, afirmó que “más de 70 proyectos estaban con problemas”. En este sentido, el defecto organizacional ha actuado como fuente de posibles ilícitos.

3. INFRACCIÓN DE DEBERES POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD REGIONAL.

Sobre el cúmulo de antecedentes se puede establecer: que durante el mes de febrero de 2013, los organismos de auditoría del Gobierno Regional, detectaron una serie de irregularidades en la rendición de la organización Valparaíso Joven y otros proyectos, mientras durante el avance de la investigación se menciona la entrega de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para obtener restituciones por los fondos asignados; en el mes de Julio de 2013, la jefa de gabinete del Intendente, Sra. SPICHIGER, habría tomado conocimiento de la utilización de facturas ideológicamente falsas para la rendición de los proyectos adjudicados a la citada organización, las que habían sido proporcionadas por CESAR MELLADO, funcionario del Gobierno Regional. Sin embargo, sólo a fines del mes de agosto de efectúa la denuncia ante el Ministerio Público (como se desprende de copia de la denuncia a la fiscalía).

Las infracciones se pueden separar en los siguientes hechos y circunstancias:

a) Uso abusivo de la delegación como mecanismo de elusión de responsabilidad por parte del exintendente CELIS:

1. Delegación de funciones en el señor SERGIO NUÑEZ:
2. Cambio de María Teresa Blanco, por Sergio Nuñez, en la responsabilidad por el concurso de seguridad ciudadana el año 2012;
3. Firma de convenios sin reparar en la reiteración de organizaciones adjudicadas y los montos adjudicados;
4. Solicitudes de diversas instituciones que imputadas a la cuota del intendente no tenían posibilidad de financiamiento (citar correo Sra. Oyarzún, testimonios); financiamiento triangular mediante los fondos de seguridad ciudadana;
5. Correo electrónico del año 2012, en el contexto de los concursos sobre deportes de MARCIA OYARZÚN a nombre del concejal Andrés Celis, según leyó en sesión el diputado señor Nuñez);
6. Correo electrónico de julio de 2013 por el cual se solicita adjudicar proyecto de seguridad ciudadana a Fundación.

b) Infracción al deber de denuncia conforme a la regla del artículo 175 del Código Procesal Penal

Ha quedado establecido, a partir de los testimonios de MELLADO, SPICHIGER, CELIS, MALDONADO y VALENZUELA PEPE, que el 22 de julio de 2013, se acredita la utilización de facturas ideológicamente falsas para rendir los proyectos de la organización Valparaíso Joven, como lo expresa SPICHIGER "...a principio de junio de 2013 me informan de auditoría que había rendido los proyectos la organización... solicite que me llevaran los antecedentes me encontré que los antecedentes no se condecían con una organización seria, como ejemplo puedo decir que un proyecto de 40 millones estaba rendido con antecedentes de uno de 30... antecedentes que llaman la atención" (pista de audio 28'08").

Cabe señalar que sólo el 22 de agosto de 2013 se presenta la denuncia al Ministerio Público, por tales proyectos, es decir, casi un mes después, no obstante el mandato explícito del artículo 175 letra b) y el plazo fijado en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Demuestra lo anterior el testimonio de SPICHIGER "...esos antecedentes derivan en que él (Mellado) haga un autodenuncia y el gobierno regional donde indica que él facilito estas facturas pero estos proyectos nunca se ejecutaron y en el servicio de impuestos internos con esos antecedentes para nosotros constituía delito y es la primera denuncia que se realiza en el ministerio público..." (Pista de audio 38'07"). "su autodenuncio señala que las actividades no se realizaron y si no se realizaron difícilmente podían ser rendidas... creo que es en agosto el autodenuncio es de fines de julio... (Pista de audio 44'34").

Sobre el punto anterior hay que tener presente lo que el auditor MALDONADO señala en su testimonio judicial:

"Se trató de averiguar de quién era esa empresa y a mediados de junio descubrieron que era de César Mellado, funcionario de la intendencia del piso 18 y era auditor de pro empleo le parece, él no es contador auditor y ahí empieza una segunda revisión, habla con don César Mellado y le pide que le explique lo de las facturas. A Uribe le enviaba los reparos de las facturas por escrito y el quedaba de responderles conforme las observaciones solicitadas, en un momento les pide formalmente en una carta que le devuelvan la rendición de cuentas que habían presentado y el no accedió, no había procedimiento establecido para eso. César Mellado les dice que proporcionó esas facturas por unos servicios prestados, eso fue en una primera instancia. Se generó alarma en la gente y pasada las 18 horas en la oficina de Susanne, don César pide hablar con ellos dos, eran 4 en la oficina. Mellado dice

abiertamente que estaba complicado porque Enrique Kittsteiner le pidió facturas para rendir proyectos del intendente y estaba complicado porque facilitó facturas exentas e iba a tener un problema tributario, estaba molesto en ese entonces, quería agredir físicamente a don Enrique Kittsteiner, ante lo cual el no habló del contexto, sino que solo dijo que era para rendir proyectos del intendente. Mellado presenta una autodenuncia en el SII donde informa que emitió facturas por servicios que no se habrían prestado. La resolución del sumario fue destitución, al final. La primera resolución fue suspensión del cargo, la Contraloría no tomó razón y propone la destitución y ahí informa que hay que disponer los antecedentes al Ministerio Público, esto fue abril, mayo de 2013”.

En este mismo sentido, respecto a las fechas de las denuncias la jefa de gabinete, SUSAN SPICHIGER, señaló:

“La denuncia es porque hay una auto denuncia señala que las actividades no se realizaron y por ende no podían ser rendidas, cree que fue en agosto porque la auto denuncia fue a fines de julio. Debía tener antecedentes de delitos además de irregularidades administrativas, las fechas parecen alejadas, en junio aparecen las rendiciones de estos proyectos en el gobierno regional y en julio Mellado hace una auto denuncia y es prueba de actividades no realizadas. La decisión de la denuncia es del intendente regional. Estaban ciertos de irregularidades administrativas por eso pusieron en conocimiento del CDE y cuando había constancia de delito se hizo la denuncia de inmediato”.

Cabe señalar, en este punto, que la denuncia en el Ministerio Público es del 22 de agosto de 2013.

En este sentido, la propia declaración judicial del intendente es indiciaria de contradicción con los elementos antes señalados:

“Caso de Valparaíso Joven explicó que era un tema civil pero cuando una persona se auto denuncia, inmediatamente presenta la denuncia. Factura falsa entre julio y agosto de 2013. La reunión con Ubilla fue en abril de 2013. A esa fecha tenía dudas de la actitud y comportamiento de Kittsteiner y por eso le dijo que pidiera facturas a Valparaíso Joven. Esto lo ponderó como un tema de rendición del proyecto. **No recuerda fecha exacta de la denuncia de Valparaíso Joven. Ha tratado de ser riguroso en probidad”.**

A propósito de la adjudicación del concurso por parte de la Organización Valparaíso Joven resulta contradictorio lo afirmado por el señor Raúl CELIS, en Agosto de 2013 ante el Consejo Regional, tal como se desprende de las Actas de las sesiones N° 620 y N° 621 del Gobierno Regional.

Requerido el Presidente del Consejo Regional sobre estos hechos, éste se limitó a afirmar que "...lo que se hizo fue despriorizar esos proyectos, no fueron pagados..." (p. 58, acta N° 620, de 8 de Agosto de 2013), luego en la sesión N° 621, nuevamente consultado por esta irregularidades, el Presidente del Consejo señala que "...puede que sean distintos concursos en distintas épocas, puede que en concursos anteriores se les hayan adjudicado proyectos, pero el concurso que le fue consultado fue despriorizado." (p. 29, acta N° 621, de 29 de Agosto de 2013).

c) Mantención de un modelo defectuoso de asignación de recursos.

Es un hecho público y notorio que la **Fundación Puerto Ideas**, en el contexto del caso relativo a la organización Valparaíso Joven, fue la que recibió, en una modalidad triangular, la suma de 15 millones de pesos, dineros que nunca fueron reintegrados.

En cuanto a la naturaleza de la entidad, el testimonio de FERNANDA ELUCHANS, en la causa RIT 185 – 2014 señala lo siguiente:

"Puerto Ideas es una organización privada que desarrolla iniciativas en el ámbito de la cultura, llevan tres versiones y este año hicieron una primera versión en Antofagasta. Se realiza todos los años el segundo fin de semana de noviembre, con conferencias, charlas, diálogos, en torno a la creatividad, ámbito humanista, científico, cada actividad tiene un valor de \$1.500 pesos y también hay actividades gratis abiertas al público"

Teniendo presente que la adjudicación de los fondos fue objeto de cuestionamiento en el proceso judicial mencionado, no deja de llamar la atención, que pese a existir un sumario administrativo en curso (febrero de 2013), la despriorización de los concursos postulados por Valparaíso Joven el 2013 y la desconexión entre los fines de la fundación (vinculada al ámbito cultural) con aquellos relativos a la seguridad pública, esta aparece postulando al concurso de seguridad ciudadana del año 2013, adjudicándose la suma de \$9.999.488 millones, según se desprende de las transferencias efectuadas el 22 de octubre de 2013, como consta en la página de transparencia del GORE. Lo anterior era un hecho conocido por el señor intendente.

d) Infracciones normativas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, corresponderá

Artículo 24.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:

j) Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa contenidas en la Ley N° 18.575, en lo que corresponda;

Si tenemos presente que en el caso de la organización del Estado la regla sobre delegación prevista en el art. 41 letra d)

Artículo 41.- El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado, sobre las bases siguientes:

a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas;

b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los delegantes;

c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda;

d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización; y

e) La delegación será esencialmente revocable.

El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la delegación.

Podrá igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas. Esta delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la facultad delegada.

Sobre esta disposición la Contraloría General de la República ha señalado en el Dictamen N° 25.627 de 13 de mayo de 2010:

“Sobre este punto, cabe expresar que aun cuando la delegación es una institución aceptada y regulada específicamente en el artículo 41 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ello es sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización, lo que, según se desprende del expediente, ocurrió precisamente en la especie, por lo que mal puede ser una circunstancia

eximente de responsabilidad. Además, como se dirá más adelante, dado que la autoridad deberá revisar su decisión de absolver al inculpado...”

El Intendente puede delegar los deberes en directivos y administrativos, es una cuestión fáctica. Por regla general hay delegación en cascada de deberes parciales y funciones. Cada uno tiene una posición de garante puntual de su actividad.

La gran pregunta de la atribución de responsabilidad es la delegación, y cuando se exige de responsabilidad es porque no todos pueden responder, porque si delego una función descargo responsabilidad, cuando delego transformo la naturaleza de la responsabilidad que delego, no es que me libere totalmente de responsabilidad. Los deberes ahora pasan a ser de vigilancia y control. Aquí radica precisamente el hecho que resulta imputable a la máxima autoridad regional: en los deberes de vigilancia que tenía respecto de sus subalternos, quienes se vieron involucrados en los hechos antes descritos por un incumplimiento del exintendente en tales deberes, por lo cual cabe a éste responsabilidad en todos los hechos que el presente informe consigna.

En suma, el exintendente don Raúl Celis Montt, tiene responsabilidad política inexcusable en la creación y/o mantención del clima organizacional que permitió los delitos e irregularidades administrativas investigados por esta Comisión: (1) al renunciar a sus facultades exclusivas de priorización de las carteras del proyecto del FNDR, en especial de la denominadas del 2% para cultura, deportes y seguridad; en beneficio de mantener las cuotas del 30% (para definición de intendente) y del 70% (para asignación por los Consejeros Regionales), permitiendo que las prioridades se definieran en otras instancias como comisiones ad hoc o formales; (2) al recomendar y aceptar que se financiaran proyectos de naturaleza diversa al fundamento de los distintos 2% del FNDR con fondos de fines específicos (proyectos de cultura con fondos de seguridad por ejemplo); (3) al cultivar la falta de control de las determinaciones de funcionarios de su confianza, nombrados por él, en la asignación de recursos a proyectos con fondos del llamado 2% del FNDR; 4) al no supervisar la existencia de mecanismos de fiscalización en la ejecución y rendición de cuentas de los proyectos aprobados; y 5) al no reaccionar oportunamente a la detección de irregularidades o delitos detectados en relación a las ejecuciones de proyectos financiados con el 2% del FNDR para deportes, cultura y seguridad, dando espacio a los intentos de regularizar a posteriori los hechos irregulares mediante la búsqueda de boletas o facturas falsas (caso de don Cesar Mellado).

Por otra parte, el CORE de la Región de Valparaíso, distorsionó o aceptó que se distorsionara gravemente su función y competencias, pasando a ser, de un organismo evaluador y decidor de las propuestas de priorización de proyectos del intendente, a un organismo de promoción de proyectos del 2% del FNDR.

Asimismo, el CORE de la Región de Valparaíso abandonó totalmente, como consecuencia de lo anterior, su rol de fiscalización de la asignación y ejecución de proyecto.

PROPOSICIONES

En este sentido se propone la creación de dos mecanismos intra y extra institucionales:

1. Creación de un órgano administrativo autónomo, integrado por funcionarios elegidos por el sistema de alta dirección pública, cuyas funciones sea la identificación y análisis de eventuales riesgos para la comisión de delitos funcionarios y contra la probidad, con el objeto de prevenir su comisión. Lo anterior se justifica atendida la estructura de dependencia jerárquica de las unidades de auditoría existentes.

El nuevo órgano será responsable de identificar y analizar los riesgos para la comisión de delitos o graves infracciones a la probidad administrativa, en la Administración del estado y especialmente en el Gobierno Regional, atendido los cuantiosos recursos que maneja presupuestariamente. El proceso de análisis deberá ser efectuado al menos cada tres meses o cuando sea requerida su opinión.

Para que el organismo pueda efectuar dicha actividad, tendrá que desarrollar las siguientes tareas:

- a) identificar los riesgos,
- b) identificar los controles,
- c) evaluar los riesgos y
- d) evaluar los controles.

Todo el proceso de identificación y análisis de riesgo será documentado por el encargado de prevención en la matriz de riesgos de cada repartición del Gobierno Regional. La matriz de riesgos es un documento, en el

cual se identifican los riesgos de comisión de delitos y se establecen sus respectivos controles de mitigación.

Asimismo, se propone la creación de un mecanismo de control que identifique los riesgos en la comisión de ilícitos denominado "semáforo", en que la luz roja signifique que el acto está prohibido; la luz amarilla, que para la ejecución del acto se requiere la opinión del órgano de prevención; y la luz verde, que el acto en cuestión no constituye riesgo para el órgano de la administración ni para sus funcionarios.

2. Sistema especial de prevención, o "Mock down raids". Se propone la realización de simulacros de comisión de irregularidades, que no sólo significa hacer auditorías sino también someter a ciertas funciones críticas de la administración en el manejo de recursos, a un monitoreo permanente de riesgos.

3. Crear un sistema de denuncia. La Comisión Investigadora propone la creación de un sistema de denuncia de hechos que comprometan la responsabilidad administrativa o que revistan caracteres de delito a Contraloría General de la República o al Ministerio Público, según corresponda, por un funcionario especial y autónomo, denominado Oficial de Cumplimiento Institucional.

Proposición de actividades ad intra la organización. En este aspecto resulta fundamental:

1. Creación instructivos y códigos de conducta. Estos documentos deben establecer con claridad los deberes funcionarios que deben estar a disposición de los funcionarios y de todos los particulares, en especial de aquellos que contraten con la administración, postulen a subsidios o aportes públicos o participen el proceso de licitación pública.

2. Realizar capacitaciones. Será función del órgano de prevención de delitos efectuar capacitaciones a los funcionarios que estén bajo su control y de particulares que mantengan relaciones contractuales o de otra índole con la administración pública".

Finalmente, la Comisión Investigadora acordó que forman parte de las conclusiones y proposiciones aprobadas las consideraciones que les sirvieron de fundamento.

El detalle de lo obrado en esta sesión queda registrado en un archivo de audio digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Reglamento de la Corporación.

Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, se levantó a las 12:00 horas.

MARCELO SCHILLING RODRÍGUEZ
Presidente de la Comisión

ÁLVARO HALABÍ DIUANA
Abogado Secretario